



Asamblea General

Distr. general
30 de septiembre de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

57º período de sesiones

9 de septiembre a 9 de octubre de 2024

Temas 2 y 10 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General**

Asistencia técnica y fomento de la capacidad

Situación de los derechos humanos y actividades de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*

Resumen

En este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 54/34 del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece un panorama general de la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, que se basa en la información recopilada y en los casos de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario documentados por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, así como en las actividades llevadas a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) delegadas en la Oficina Conjunta. En el informe, el Alto Comisionado expone los aspectos principales de la evolución de la situación de los derechos humanos y formula recomendaciones al Gobierno y a los asociados internacionales de la República Democrática del Congo.

* Este informe se presentó a los servicios de conferencias para su tramitación fuera del plazo establecido a fin de incluir en él la información más reciente.



I. Introducción

1. Entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo se deterioró debido a la persistencia del conflicto armado en las provincias orientales. Los grupos armados, particularmente el Movimiento 23 de Marzo (M23), las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y diversos grupos Mai-Mai, siguieron lanzando ataques mortíferos contra la población civil que causaron desplazamientos y aumentaron la vulnerabilidad de las personas desplazadas frente a nuevos casos de violencia, como actos de violencia sexual relacionada con el conflicto, explotación y abusos sexuales. Las fuerzas de defensa y seguridad congoleñas también cometieron violaciones de los derechos humanos, por ejemplo en el transcurso de operaciones militares lanzadas contra los grupos armados.

2. La Oficina Conjunta siguió apoyando los esfuerzos del Gobierno de la República Democrática del Congo para prevenir y combatir las violaciones y abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) puso fin a sus operaciones en Kivu del Sur el 30 de abril de 2024 y se retiró por completo de la provincia, completando así la primera fase del plan general de separación¹. No obstante, de conformidad con lo acordado con el Gobierno y en consonancia con la resolución 2717 (2023) del Consejo de Seguridad, la Oficina Conjunta mantiene una presencia en la provincia de Kivu del Sur para contribuir a la capacidad residual de la MONUSCO para seguir desempeñando funciones prioritarias en materia de derechos humanos.

3. Del 15 al 18 de abril de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una visita oficial a la República Democrática del Congo, en el transcurso de la cual visitó Bunia, Goma y Kinshasa y se reunió con el Presidente, varios ministros, representantes de la sociedad civil, víctimas de violaciones de los derechos humanos y la comunidad diplomática. Durante su visita, subrayó que los derechos humanos eran un instrumento de promoción de la paz y el desarrollo sostenible, además de un baluarte contra el resurgimiento del conflicto. También mencionó las causas profundas del conflicto, entre las que figuraban la explotación de los recursos naturales, la corrupción y la impunidad, a las que el Gobierno debía hacer frente para poner fin al ciclo de violencia. Además, señaló al Gobierno que era necesario proteger los espacios cívico y democrático, en particular velando por que los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos gozaran de protección y pudieran ejercer libremente sus actividades. También hizo hincapié en la necesidad de garantizar la protección de los civiles en las zonas de conflicto, en particular frente a la violencia sexual. A lo largo del informe se exponen los aspectos fundamentales de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la visita del Alto Comisionado².

II. Metodología

4. La información que figura en el presente informe no refleja todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos ni todas las violaciones del derecho internacional humanitario que se cometieron en la República Democrática del Congo durante el período que abarca el informe, sino únicamente las que la Oficina Conjunta pudo verificar mediante la corroboración por múltiples fuentes, de conformidad con la metodología del ACNUDH y el requisito de los “motivos razonables para creer” como nivel de prueba exigido. Con la retirada progresiva de la MONUSCO, la Oficina Conjunta experimentó mayores limitaciones logísticas y de seguridad para acceder a determinadas zonas, especialmente en las cinco provincias afectadas por el conflicto de Ituri, Maniema, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganica, así como en las zonas afectadas por los conflictos

¹ Véase S/2023/904.

² Véase también <https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2024/04/un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-concludes-official-visit-drc>.

intercomunales de las provincias de Mai-Ndombe y Tshopo³. Cuando no pudo acceder a una zona, la Oficina Conjunta recurrió a su red de defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo una vigilancia a distancia, dando prioridad en todo momento a la protección de las fuentes primarias y secundarias y situando los principios de “no hacer daño”, confidencialidad y consentimiento informado en el centro de su mandato de vigilancia e investigación.

III. Aspectos principales de la evolución de la situación de los derechos humanos

5. Durante el período a que se refiere el informe, de conformidad con la metodología del ACNUDH, la Oficina Conjunta documentó 5.047 violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, lo que representa una disminución del 2 % con respecto al período abarcado por el informe anterior. Sin embargo, también documentó un aumento del 13 % en el número de víctimas en todo el país (12.787)⁴. Del total de violaciones y abusos, el 85 % se produjeron en las provincias afectadas por el conflicto y el 61 % fueron presuntamente cometidos por miembros de grupos armados. Las provincias más afectadas fueron Kivu del Norte e Ituri, en las que se produjeron, respectivamente, el 50 % y el 14 % de todas las violaciones y abusos documentados.

6. Se prosiguieron los esfuerzos regionales encaminados a rebajar la tensión entre la República Democrática del Congo y Rwanda y a lograr una solución diplomática al conflicto, en cuyo marco el Presidente de Angola celebró rondas de conversaciones con las autoridades de ambos Estados con el fin de relanzar el estancado proceso de Luanda. En el marco del proceso de Nairobi, tras la intensa actividad desplegada en 2022 con la celebración de cuatro consultas amplias entre las autoridades, los grupos armados y las comunidades en la República Democrática del Congo y en Kenya, en 2023 el nivel de actividad disminuyó. El 15 de diciembre de 2023, tras el fin del mandato de la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental, se desplegó la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en la República Democrática del Congo con el fin de apoyar al Gobierno de la República Democrática del Congo en el restablecimiento de la paz y la seguridad en el este del país. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda prosiguieron las operaciones militares contra las FDA en Ituri y Kivu del Norte, mientras que las fuerzas armadas de Burundi participaron en operaciones militares en Kivu del Norte y Kivu del Sur.

7. En diciembre de 2023 se celebraron elecciones generales en un contexto de marcada tensión política, que se vio agravada por el conflicto armado en Kivu del Norte y las denuncias de graves deficiencias logísticas y organizativas formuladas por opositores políticos y miembros de la sociedad civil. Algunos miembros de partidos políticos protagonizaron casos de violencia electoral, en ocasiones con motivación étnica, que afectaron a las comunidades, en su mayor parte en las regiones de Katanga y Kasái, y aumentaron las denuncias de episodios de discurso de odio que podrían constituir incitación a la hostilidad, la violencia y la discriminación.

8. El 13 de marzo de 2024, el Gobierno levantó la moratoria *de facto* sobre la pena de muerte que había permanecido en vigor desde 2003. Según las autoridades, dicha medida se adoptó por la incidencia del terrorismo y la elevada criminalidad, así como para responder al aumento de los actos de traición en el contexto de las operaciones militares contra el M23. El levantamiento de la moratoria supone un importante retroceso y contraviene el

³ Entre esas limitaciones pueden mencionarse la no disponibilidad de aeronaves, vehículos de alquiler u otros medios de transporte seguros en algunas zonas. Por consiguiente, varias misiones tuvieron que ser suspendidas, en algunos casos debido a que las carreteras eran impracticables a causa de las infraestructuras deficientes y de las condiciones meteorológicas.

⁴ Todas las violaciones y abusos que se documentan en el presente informe se han verificado siguiendo la metodología del ACNUDH. Un incidente puede incluir múltiples tipos de violaciones y múltiples víctimas. Cuando se produce el mismo tipo de violación o abuso en el mismo incidente (por ejemplo, una violación o abuso del derecho a la vida), se contabiliza una sola vez. No obstante, un tipo de violación o abuso puede afectar a múltiples víctimas.

compromiso adquirido por las autoridades de la República Democrática del Congo de trabajar por la abolición total de la pena de muerte⁵.

A. Protección de la población civil en las zonas de conflicto

1. Situación actual y medidas adoptadas por el Gobierno

9. Entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, la Oficina Conjunta documentó 4.286 violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario en las provincias afectadas por el conflicto, lo que representa una disminución del 1 % con respecto al período abarcado por el informe anterior. Sin embargo, el número de víctimas en las zonas afectadas por el conflicto ha aumentado un 10 %, hasta alcanzar un total de 10.771, debido al aumento global de los ataques mortíferos lanzados por grupos armados contra civiles.

10. Según fuentes humanitarias, actualmente hay más de 7 millones de civiles desplazados debido al deterioro de las condiciones de seguridad en el este del país⁶. Durante el período que abarca el informe, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios documentó un total de 272 incidentes que afectaron a personal o bienes humanitarios y en los que fallecieron 3 trabajadores humanitarios, 33 resultaron heridos y 47 fueron secuestrados. El grupo temático de protección documentó 21 ataques dirigidos contra emplazamientos de desplazados internos, en los que al menos 66 personas murieron, 45 resultaron heridas, 10 fueron violadas y 22 fueron secuestradas, y en los que se destruyeron o incendiaron 802 refugios y viviendas. De esos ataques, 19 se registraron en Kivu del Norte, 1 en Ituri y 1 en Kivu del Sur. Además, se documentaron otras 18 violaciones del carácter civil y humanitario de los emplazamientos de desplazados internos, 13 de ellos en Kivu del Norte, 3 en Ituri y 2 en Kivu del Sur. Si bien todos los ataques dirigidos contra esos emplazamientos se atribuyeron a grupos armados como la CODECO, Mai-Mai y el M23, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo fueron responsables de aproximadamente el 30 % de las demás violaciones del carácter civil y humanitario de esos lugares.

11. En el período a que se refiere el informe, la MONUSCO documentó 37 ataques dirigidos contra escuelas y hospitales en Kivu del Norte (11 escuelas y 10 hospitales), en Ituri (3 escuelas y 5 hospitales) y en Kivu del Sur (4 escuelas y 4 hospitales), lo que representa una disminución global del 69 % con respecto al período abarcado por el informe anterior (68 escuelas y 53 hospitales). Los principales autores de esos ataques fueron el M23 (15), las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (5), la CODECO (4), Twigwaneho (3), las FDA (3), Mai-Mai Yakutumba (2), Nyatura (1), Nduma Defensa del Congo-Renovado (1), la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (1), Resistencia en pro del Estado de Derecho en Burundi (1) y las Fuerzas Armadas de Burundi (1).

12. La Oficina Conjunta documentó el uso frecuente de armamento explosivo, incluida artillería pesada, contra zonas pobladas por civiles durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y el M23, lo que causó muertes y lesiones entre la población civil y daños en infraestructuras, como instalaciones médicas y escuelas. Por ejemplo, el 3 de mayo de 2024, los emplazamientos de desplazados internos de Lac Vert y Mugunga, cerca de Goma, recibieron impactos de proyectil que causaron la muerte de al menos 12 civiles y heridas a otros 34.

⁵ La Constitución de la República Democrática del Congo, aprobada el 18 de febrero de 2006, establece que el derecho a la vida es sagrado (art. 16) y no hace referencia a la pena de muerte como una medida aplicable en el país. En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un dictamen favorable a la formalización de la moratoria *de facto* sobre la pena de muerte y alentó al Gobierno a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En 2019, un miembro de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte que de momento no se ha debatido.

⁶ Véase <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-internally-displaced-persons-and-returnees-april-2024>.

13. En Kivu del Norte, la Oficina Conjunta documentó 2.510 violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, el 74 % de los cuales fueron cometidos por grupos armados. El M23 amplió su control en los territorios de Rutshuru y Masisi, y en abril se hizo con el control de importantes rutas comerciales y de la explotación minera de coltán de Rubaya. La Oficina Conjunta documentó 441 abusos cometidos por el M23, que causaron la muerte de 173 hombres, 37 mujeres, 27 víctimas de género y edad desconocidos, 14 niñas y 13 niños. Los grupos Nyatura fueron responsables de la muerte de 59 hombres, 9 víctimas de género y edad desconocidos, 7 mujeres, 3 niños y 1 niña, mientras que la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano lo fue de la muerte de 25 hombres, 7 mujeres, 4 niños, 4 niñas y 1 niño de género desconocido. Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo fueron responsables de la muerte de 55 hombres, 22 mujeres, 10 víctimas de género desconocido, 9 niños y 3 niñas.

14. Durante el período que abarca el informe, la MONUSCO hizo frente en Kivu del Norte a ataques perpetrados por el M23, miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y grupos armados adscritos a Wazalendo. Dichos ataques, dirigidos contra el personal de mantenimiento de la paz, podrían constituir crímenes de guerra⁷. La labor de protección y asistencia humanitaria desempeñada por la MONUSCO se vio muy afectada por la inseguridad, la falta de libertad de circulación y otras restricciones.

15. El 30 de agosto de 2023, en Goma, soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza para interrumpir una manifestación pública celebrada por miembros de una organización religiosa conocida como Fe Natural Judaica y Mesianica Hacia las Naciones. Durante la operación murieron al menos 102 civiles (90 hombres, 8 mujeres y 4 niños). Al menos otras 80 personas (66 hombres, 9 mujeres y 5 niños) resultaron heridas, mientras que 139 civiles (104 hombres, 6 mujeres y 29 niños) fueron detenidos y puestos a disposición judicial. El 4 de septiembre de 2023, 115 civiles fueron juzgados por asociación delictiva y participación en un movimiento insurreccional⁸. El 2 de octubre de 2023, un oficial fue condenado a la pena de muerte y 3 soldados a diez años de prisión por crímenes de lesa humanidad (asesinato)⁹ y otros delitos tipificados en el derecho penal de la República Democrática del Congo, como destrucción dolosa o incitación al personal militar a actuar contra el deber y la disciplina¹⁰.

16. Pese a que se prosiguió la operación Shujaa, dirigida conjuntamente por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda contra las FDA, y se prorrogó el estado de sitio (*état de siege*) vigente en las provincias de Ituri y Kivu del Norte desde mayo de 2021, las FDA siguieron activas en esas dos provincias. La Oficina Conjunta ha documentado 487 abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por las FDA, que han causado la muerte de 826 personas (501 hombres, 244 mujeres, 32 víctimas de género y edad desconocidos, 22 niños, 15 niñas y 12 niños de género desconocido). De entre todos los autores de abusos y violaciones en el conjunto del país durante el período abarcado por el informe, las FDA fueron el grupo con mayor número de víctimas vinculadas a sus abusos¹¹.

17. En la provincia de Ituri, particularmente en los territorios de Irumu y Mambasa, la CODECO y Mai-Mai Zaire, así como las FDA, siguieron perpetrando ataques contra la población civil y represalias por motivos étnicos. La Oficina Conjunta documentó 719 violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional

⁷ En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 8, párr. 2 b) iii).

⁸ La justicia militar condenó al líder del grupo, Ephraïm Bisimwa, y a otros siete miembros a la pena de muerte. Otros 50 miembros fueron condenados a penas de entre 10 y 20 años de prisión.

⁹ Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.

¹⁰ Código de Justicia Militar, arts. 66 y 88.

¹¹ Si bien esta cifra representa una disminución del 15 % en el número de abusos documentados (y una reducción del 25 % en el número de víctimas de ejecuciones sumarias) con respecto al período abarcado por el informe anterior, entre todos los autores de abusos y violaciones, las FDA fueron quienes ostentaron el mayor número de víctimas vinculadas a sus abusos.

humanitario en Ituri, el 42 % de los cuales se atribuyeron a la CODECO. Dichas violaciones y abusos causaron la muerte de 387 personas (235 hombres, 72 mujeres, 65 niños de género desconocido, 12 niños y 3 niñas). El 19 de abril de 2024, los cinco principales grupos armados activos en la provincia de Ituri¹² firmaron un acuerdo de cesación inmediata de las hostilidades que llevó a una disminución del número de ataques y de abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario perpetrados por ellos.

18. En Kivu del Sur se documentaron 459 abusos y violaciones de los derechos humanos, lo que representa un aumento del 4 % con respecto al período abarcado por el informe anterior, en cuyo marco se asesinó a un total de 85 personas (66 hombres, 13 mujeres y 6 niños) y se cometieron actos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra 68 mujeres, 32 niñas, 14 hombres, 7 niños y 2 niños de género desconocido. La mayor parte de los abusos contra los derechos humanos fueron cometidos por grupos armados adscritos a Mai-Mai Raia Mutomboki. Los agentes estatales fueron responsables del 35 % de las violaciones de los derechos humanos, particularmente en casos de malos tratos y detenciones arbitrarias, la mayoría cometidos por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo.

19. En la provincia de Tanganica, el número de violaciones y abusos documentados aumentó un 9 % con respecto al período abarcado por el informe anterior, lo que representa un total de 532 violaciones y abusos, en su mayor parte relacionados con el derecho a la propiedad, con el derecho a la libertad personal y con casos de malos tratos, así como de violencia sexual relacionada con el conflicto. Los grupos armados fueron responsables de gran parte de los abusos (el 52 %), que afectaron a 1.308 víctimas (774 hombres, 373 mujeres, 119 víctimas de edad y género desconocidos, 20 niñas, 12 niños y 10 niños de género desconocido). Los agentes estatales cometieron el 48 % de las violaciones de los derechos humanos, que afectaron a 441 víctimas (332 hombres, 63 mujeres, 25 niños, 17 niñas, 3 niños de género desconocido y 1 víctima de edad y género desconocidos).

20. La inseguridad en el norte de la provincia, debida a la presencia del grupo armado Mai-Mai Apa Na Pale y otros grupos Mai-Mai en la carretera que une Kalemie a Bendera, sigue siendo motivo de preocupación. Entre los grupos armados, Mai-Mai Apa Na Pale fue el que cometió el mayor número de abusos (el 33 %), mientras que entre los agentes estatales, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo fueron responsables del 18 % de las violaciones de los derechos humanos documentadas en Tanganica.

21. En Mai-Ndombe y provincias aledañas del oeste del país, el conflicto intercomunitario iniciado en 2022 siguió agravándose durante el período abarcado por el informe. Civiles armados, organizados en los llamados Mobondo¹³, siguieron atacando a civiles y a las fuerzas de defensa y seguridad en las provincias de Mai-Ndombe, Kwilu, Kinshasa y Kwango. Durante el período que abarca el informe, la Oficina Conjunta documentó 15 incidentes atribuidos a civiles armados de los llamados Mobondo, que causaron la muerte de al menos 57 personas. Las fuerzas de seguridad y defensa fueron responsables de seis violaciones de los derechos humanos, que causaron la muerte de 34 personas (28 hombres, 4 mujeres y 2 niños). Desde junio de 2023, la Oficina Conjunta ha documentado la muerte de al menos 169 miembros de Mobondo que habían sido detenidos por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo por participar en una insurrección y permanecían reclusos en la prisión del Cincuentenario de la ciudad de Bandundu. Al parecer, las causas de su fallecimiento fueron las condiciones de reclusión deficientes y el hacinamiento.

22. En abril de 2023 estalló otro conflicto intercomunitario en la provincia de Tshopo entre miembros de las comunidades mbole y lengola, en cuyo contexto, según los representantes de ambas comunidades, han sido asesinadas hasta 700 personas. Sin embargo, la Oficina Conjunta no pudo verificar las cifras debido al elevado grado de inseguridad.

¹² La CODECO, la Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri, el Frente Patriótico e Integracionista del Congo y el Movimiento de Autodefensa Popular de Ituri.

¹³ Miembros de la comunidad yaka formaron grupos parapoliciales llamados Mobondo.

Según fuentes humanitarias, los continuos enfrentamientos entre las comunidades mbole y lengola han causado el desplazamiento de al menos 18.000 personas hacia Kisangani (provincia de Tshopo).

2. Medidas adoptadas por la Oficina Conjunta

23. La Oficina Conjunta prosiguió su labor de vigilancia y presentación de informes en relación con la situación de los derechos humanos, así como su labor de promoción ante las partes interesadas pertinentes a fin de prevenir y combatir las violaciones y abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario en las provincias afectadas por el conflicto. Contribuyó, junto con otros componentes civiles, policiales y militares de la MONUSCO, a la ejecución de las tareas prioritarias de la Misión: apoyar la protección de los civiles, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y la reforma del sector de la seguridad. Pese a ello, la situación de la seguridad, las limitaciones logísticas y las continuas expresiones de hostilidad hacia la MONUSCO afectaron en gran medida a la capacidad de la Oficina Conjunta para llevar a cabo su labor de vigilancia de los derechos humanos en algunas zonas afectadas por el conflicto armado.

24. La Oficina Conjunta llevó a cabo 9 misiones de vigilancia y 7 misiones de investigación, y participó en 12 misiones de evaluación conjuntas en provincias afectadas por el conflicto armado, lo que contribuyó a la oportuna investigación, vigilancia y denuncia de las violaciones y abusos de los derechos humanos y de las violaciones del derecho internacional humanitario. También siguió coordinando la aplicación por la MONUSCO de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, y realizó 404 evaluaciones de riesgos. Se adoptó un conjunto sólido de medidas de mitigación basadas en las recomendaciones formuladas por la secretaría para la política de diligencia debida en materia de derechos humanos. La Oficina Conjunta también organizó 62 sesiones de formación para más de 3.200 miembros de la Policía Nacional Congoleña y de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (entre ellos, 267 mujeres), también para los desplegados en las zonas de operaciones. Además, siguió desempeñando su labor de promoción ante las autoridades congoleñas facilitando 40 reuniones de los comités de seguimiento¹⁴ —14 de las cuales se celebraron en provincias afectadas por el conflicto— a las que también hizo aportaciones, lo que condujo a la apertura de investigaciones y la adopción de medidas disciplinarias en al menos 30 casos.

25. La Oficina Conjunta siguió vigilando la situación y contribuyó a los esfuerzos realizados conjuntamente con los miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país para apoyar la resolución de la crisis de Mai-Ndombe y proporcionar ayuda humanitaria a los desplazados. Su labor de vigilancia de las condiciones de reclusión y del proceso judicial a que eran sometidas las personas detenidas en las operaciones militares se vio obstaculizada por la denegación de acceso a los centros de reclusión militares. Durante el período que abarca el informe, se organizaron siete misiones sobre el terreno y se intercambió información con las autoridades para apoyar la lucha contra la impunidad y para prevenir y combatir el discurso de odio.

26. En mayo de 2024, la Oficina Conjunta y la MONUSCO apoyaron la organización de un taller de tres días de duración destinado a reforzar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos y la protección de la población civil en el contexto de los conflictos intercomunales. Su objetivo era contribuir al restablecimiento de la estabilidad y la cohabitación pacífica entre las comunidades.

¹⁴ Los comités de seguimiento se ocupan de las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y de la Policía Nacional Congoleña.

B. Libertades fundamentales y espacio democrático

1. Situación actual y medidas adoptadas por el Gobierno

27. Durante el período que abarca el informe, la Oficina Conjunta documentó una disminución de aproximadamente el 30 % en los abusos y violaciones de los derechos humanos relacionados con el espacio democrático (de 296 a 208). Los agentes estatales fueron responsables del 90 % de las violaciones documentadas, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con el derecho a la libertad y a la seguridad y el derecho a la libertad de opinión y de expresión. La Oficina Conjunta documentó al menos 24 casos de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional Congoleña al responder a manifestaciones.

28. La Oficina Conjunta también documentó casos de intimidación, amenazas de violencia física, agresiones y represalias contra 387 defensores de los derechos humanos y 67 periodistas, perpetrados tanto por agentes estatales como por grupos armados. Estas cifras representan un aumento del 6 % con respecto al período abarcado por el informe anterior. La mayoría de las amenazas documentadas se produjeron en las provincias afectadas por el conflicto y en varios casos estuvieron relacionadas con el proceso electoral. Casi todas quedaron impunes.

29. El proceso electoral estuvo marcado por la violencia, las violaciones de los derechos humanos, los abusos y el aumento de las denuncias de discurso de odio que podían equivaler a incitación a la hostilidad, la violencia y la discriminación. El Alto Comisionado expresó su preocupación por el aumento del discurso de odio y la incitación a la violencia por motivos étnicos, especialmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como en las regiones de Kasái y Katanga, tras las elecciones de diciembre de 2023¹⁵. La Oficina Conjunta también documentó actos de violencia electoral, en su mayoría dirigidos contra mujeres, por miembros de partidos políticos durante el período electoral. Por ejemplo, el grupo Fuerzas del Progreso, vinculado a la Unión para la Democracia y el Progreso Social, protagonizó actos de agresión a opositores políticos en las provincias de Alto Katanga, Kasái, Kinshasa y Lualaba. La Oficina Conjunta también documentó la imposición de restricciones a los espacios cívico y democrático, en particular de las libertades de reunión y expresión, por ejemplo en el derecho de acceso a la información y la libertad de circulación de los dirigentes de la oposición, así como la obstaculización de la labor de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

30. Las autoridades congoleñas adoptaron una serie de medidas destinadas a hacer frente a los problemas relacionados con los derechos humanos durante el período electoral. Una fue movilizar a 2.500 agentes de la Policía Nacional Congoleña y a 1.500 soldados de la Guardia Republicana para proteger el proceso electoral de los posibles ataques de grupos armados. Otra fue establecer un marco de debate permanente entre el Ministerio de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil y otros asociados, como la Oficina Conjunta, para tratar las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos y darles respuesta. Además, la Comisión Electoral Nacional Independiente actualizó el censo electoral para garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de su derecho de voto y, en algunas localidades, se tomaron medidas para cumplir el requisito de que los desplazados pudieran votar. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desplegó 820 observadores de derechos humanos en 20 provincias para que llevaran a cabo una labor de vigilancia del proceso electoral en cuyo marco se denunciaron con regularidad actos de discurso de odio y de incitación al odio.

31. La Oficina Conjunta siguió documentando casos de discurso de odio. Durante el período abarcado por el informe, la Oficina Conjunta constató que, de los 23 casos denunciados, 13 superaban el umbral establecido en el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Los 13 casos se habían producido durante el período electoral. El proyecto de ley sobre tribalismo, racismo y xenofobia, redactado

¹⁵ Véase <https://www.ohchr.org/es/statements/2024/01/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-rising-hate-speech-and>.

en 2020, no se ha debatido en la Asamblea Nacional durante el período examinado por el presente informe, y se han tomado muy pocas medidas judiciales para combatir los casos de incitación al odio que constituían incitación a la hostilidad, la violencia y la discriminación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades congoleesas denunciaron con regularidad los actos de discurso de odio y de incitación al odio y subrayaron los peligros que representaban para el país.

2. Medidas adoptadas por la Oficina Conjunta

32. La Oficina Conjunta formuló y puso en práctica una estrategia de apoyo a los esfuerzos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos durante el proceso electoral, que abarcaba un plan de vigilancia de la situación de los derechos humanos, la impartición de capacitación a los asociados, el establecimiento de alianzas estratégicas y la promoción. Las actividades de formación y capacitación en materia de vigilancia de los derechos humanos y el discurso de odio en el contexto de las elecciones, impartidas por la Oficina Conjunta a al menos 1.145 hombres y 422 mujeres de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aumentaron los conocimientos de los destinatarios y los capacitaron para participar de manera significativa en la labor destinada a prevenir y combatir el discurso de odio.

33. Además de participar en los esfuerzos integrados de la MONUSCO para vigilar los eventos electorales durante la campaña y el día de los comicios y para informar al respecto, la Oficina Conjunta desplegó equipos móviles en 20 localidades de 13 provincias y elaboró un informe público. Durante el período que abarca el informe, también puso en práctica medidas de protección individual para 463 personas (60 de ellas, mujeres), entre las que figuraban 387 defensores de los derechos humanos (45 de ellos, mujeres) y 67 periodistas (9 de ellos, mujeres). Entre los beneficiarios también figuraban víctimas y testigos de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, así como personas en riesgo de sufrir represalias por sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos.

C. Violencia sexual y de género

1. Situación actual y medidas adoptadas por el Gobierno

34. Durante el período que abarca el informe, la Oficina Conjunta documentó 698 víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto (488 mujeres, 173 niñas, 8 niños, 11 niños de género desconocido y 18 hombres), lo que representa un aumento del 11 % con respecto al período abarcado por el informe anterior. Los agentes estatales fueron responsables del 27 % de esos casos de violencia y los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y de la Policía Nacional Congoleesa siguieron figurando entre los principales autores, con 135 y 21 víctimas, respectivamente. Los grupos armados fueron responsables de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron al 73 % de las víctimas, con el siguiente desglose: grupos Mai-Mai (65 mujeres, 20 niñas y 24 niños de género desconocido), Mai-Mai Apa Na Pale (77 mujeres, 7 niñas y 3 hombres), M23 (66 mujeres y 14 niñas), Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (57 mujeres y 4 niñas), Mai-Mai Raia Mutomboki (37 mujeres, 13 hombres, 6 niñas y 1 niño de género desconocido), CODECO (28 mujeres y 14 niñas), FDA (30 mujeres y 6 niñas), Nyatura (20 mujeres y 11 niñas), Frente Patriótico e Integracionista del Congo (3 mujeres y 1 niña), Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano (2 mujeres y 1 niña), Mai-Mai Zaire (2 mujeres), Fuerza de Resistencia Patriótica de Ituri (1 mujer) y Nduma Defensa del Congo-Renovado (1 mujer). Al igual que en el período abarcado por el informe anterior, la mayor parte de los casos se documentaron en Kivu del Norte (39 %), Tanganica (20 %), Ituri (18 %), Kivu del Sur (18 %) y Maniema (5 %).

35. La persistencia de la violencia armada agravó el riesgo de violencia de género perpetrada por miembros de los grupos armados, en particular el M23, contra mujeres y niñas en busca de alimentos, agua y leña en los emplazamientos de desplazados y sus alrededores. Además, la falta de alimentos y de acceso a la asistencia humanitaria y la inseguridad hicieron que muchas mujeres y niñas fueran vulnerables a la explotación sexual y a la posible trata de personas. Los desplazamientos debidos a los conflictos y a la inseguridad dieron lugar a que

la población civil recurriera cada vez más a mecanismos negativos de afrontamiento, como la normalización del matrimonio infantil, precoz y forzado, incluso con miembros de las fuerzas de defensa y seguridad congoleñas y con miembros de los grupos armados¹⁶, particularmente en las bases militares y las explotaciones mineras y sus alrededores. Los grupos armados no estatales, especialmente las FDA y los grupos Mai-Mai, siguieron secuestrando, manteniendo cautivas y sometiendo a esclavitud sexual a mujeres y niñas, exponiéndolas a sufrir embarazos no deseados, tortura, malos tratos y homicidio.

36. El Gobierno realizó progresos en la lucha contra la violencia de género, por ejemplo mediante la aprobación de nuevas disposiciones legislativas¹⁷. El derecho interno contempla nuevos delitos tipificados como violencia sexual y de género y establece la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género. También prevé la aplicación de un enfoque centrado en la víctima en todas las fases de los procedimientos judiciales y que todas las costas procesales corran a cargo del tesoro público.

2. Medidas adoptadas por la Oficina Conjunta

37. Muchos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto siguen sin denunciarse, por lo que los que se documentan no son sino una fracción de los que ocurren realmente. Las limitaciones de seguridad, logísticas y financieras, así como la estigmatización y el temor a represalias que afectan a los supervivientes, dificultaron la verificación de los casos. Durante el período que abarca el informe, la Oficina Conjunta participó en el ejercicio de ampliación de todo el sistema del Comité Permanente entre Organismos destinado a reforzar la capacidad operativa y financiera para hacer frente a la violencia sexual en las provincias orientales (junio a diciembre de 2023). También asignó recursos humanos y financieros adicionales para facilitar la documentación de los casos, el análisis de sus causas profundas y la organización de nuevas misiones de determinación de los hechos centradas en la violencia sexual relacionada con el conflicto.

38. La Oficina Conjunta organizó 17 sesiones de formación especializada sobre violencia sexual relacionada con los conflictos destinadas a 315 miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y 200 agentes de la Policía Nacional Congoleña, incluidos agentes de la policía judicial. De resultados de ello, 91 comandantes de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo de las provincias de Alto Katanga y Alto Lomami firmaron un acta de compromiso para combatir la violencia sexual y llevar ante la justicia a los autores de actos de violencia sexual que integraran sus unidades.

39. La Oficina Conjunta, en coordinación con la MONUSCO, también proporcionó asesoramiento técnico y financiación a las autoridades judiciales para investigar y enjuiciar los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Durante el período a que se refiere el informe, participaron en los procedimientos al menos 731 víctimas y testigos. Además, la Oficina Conjunta prestó asistencia técnica y financiera para la celebración del juicio de Kamonia, que se inició el 20 de mayo de 2024¹⁸. Durante el período a que se refiere el informe, 66 personas, entre ellas 23 miembros de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, 4 agentes de la Policía Nacional Congoleña, 8 miembros de grupos armados y 31 civiles fueron declaradas culpables y condenadas por violencia sexual relacionada con el conflicto.

¹⁶ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/drc-alarming-increase-trafficking-sexual-exploitation-say-experts>.

¹⁷ La Ordenanza-Ley núm. 23/023, de 11 de septiembre de 2023, por la que se modificó y completó el Decreto de 30 de enero de 1940 sobre el Código Penal Congolés, y la Ordenanza-Ley núm. 23/024, de 11 de septiembre de 2023, por la que se modificó y completó el Decreto de 6 de agosto de 1959 sobre el Código de Procedimiento Penal.

¹⁸ Se abrió causa contra 11 personas, entre las que figuraban autoridades provinciales, agentes de la Policía Nacional Congoleña y miembros de la milicia Bana Mura, por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, participación en un movimiento insurreccional y terrorismo. Los delitos se habían cometido entre marzo y junio de 2017.

D. Derechos económicos, sociales y culturales

1. Situación actual y medidas adoptadas por el Gobierno

40. Pese a que el producto interno bruto (PIB) del país experimentó un crecimiento medio anual del 4,4 % en el último decenio, la pobreza afecta al 74,7 % de la población¹⁹. La incidencia de la pobreza es mayor en las zonas rurales (84,9 %) que en las urbanas (62,6 %) y hay una disparidad significativa entre los hombres (75,6 %) y las mujeres (71,6 %)²⁰, lo que pone de manifiesto una deficiencia de crecimiento inclusivo y la necesidad de actuar con decisión para agilizar los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 10²¹. El país hace frente a un riesgo moderado de agobio por la deuda²² y sigue padeciendo inflación debido a la depreciación del franco congolés, la persistencia de las consecuencias económicas negativas de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el conflicto armado en Ucrania, que ha dado lugar a un aumento del precio de mercado de los cereales y los fertilizantes.

41. Además, las decisiones relativas a las asignaciones presupuestarias siguen dependiendo de la volatilidad de la situación de la seguridad. En diciembre de 2023, pese al reducido margen fiscal y de forma similar a los dos años anteriores, el gasto se reorientó hacia la seguridad y las elecciones, lo que se tradujo, según el Banco Africano de Desarrollo, en un déficit presupuestario del 1,7 % del PIB para ese año²³.

42. De noviembre de 2023 a febrero de 2024, las inundaciones que afectaron a 18 provincias, principalmente Ecuador, Ubangi del Sur, Tshopo y Kinshasa, tuvieron repercusiones en los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud y al acceso a agua y saneamiento, pero también en el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Según la Organización Mundial de la Salud, se vieron afectados 767.951 hogares, 300 personas perdieron la vida y 839 sufrieron lesiones y recibieron asistencia médica. Sufrieron daños al menos 76.733 viviendas, 1.528 escuelas, 296 centros sanitarios, 205 mercados y 138 carreteras²⁴.

43. La ocupación por el M23 de importantes extensiones de territorio en Kivu del Norte y la persistencia de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y el M23 también afectaron de forma notable al derecho a la educación y provocaron el cierre de empresas y comercios, lo que fue en detrimento del derecho de la población al trabajo y a un nivel de vida digno. En enero de 2024, el M23 presionó a profesores, directores y prefectos en las zonas bajo su control para que organizaran el inicio del nuevo curso escolar, obligando a los padres a mandar a sus hijos a la escuela pese al deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de material educativo adecuado. El 23 de enero de 2024, 17 profesores de Tongo y Bambo huyeron a zonas controladas por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo por temor al reclutamiento forzoso de niños y de ellos mismos, lo que obstaculizó considerablemente el acceso a la

¹⁹ El índice de desarrollo humano del país para 2022 fue de 0,481, lo que lo situó en el puesto 180 de 193 países, en la categoría de “desarrollo humano bajo”. No obstante, el índice mejoró con respecto a 2021, cuando había alcanzado un valor de 0,475. Véase <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/COD>.

²⁰ Véase https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-07/DP_DCP_COD_4_0.pdf.

²¹ En el examen nacional voluntario de 2023 se ofrece una visión general de los progresos realizados por el país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en él se pone de manifiesto que solo se están realizando avances suficientes en un 15 % de las metas nacionales relativas a los Objetivos. En aproximadamente el 45 % de las metas, si bien se ha avanzado en el cumplimiento, los progresos han sido moderada o gravemente insuficientes. En aproximadamente el 40 % restante, no se han registrado avances o se han observado retrocesos con respecto a la base de referencia de 2015. Por consiguiente, pese a que ha habido cierto progreso, los avances a medio plazo hacia la Agenda 2030 siguen siendo lentos y escasos.

²² El Banco Africano de Desarrollo calculó una relación entre la deuda y el PIB del 21,5 % en 2023. Véase el perfil del país en <https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-economic-outlook>.

²³ *Ibid.*

²⁴ Véase <https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-of-congo/news/faire-face-aux-consequences-des-inondations-en-rdc>.

educación en esas dos localidades. Además, la inseguridad en el territorio de Mambasa (provincia de Ituri) causó desplazamientos masivos que obligaron al cierre de al menos 26 escuelas desde enero, lo que dejó sin escuela, al menos, a 10.000 niños, entre ellos 3.000 niñas.

44. La inseguridad tiene repercusiones negativas en el derecho de la población a la alimentación. Los grupos armados impiden, en las zonas que controlan, que los civiles accedan a sus granjas. Por ejemplo, el M23 ha limitado o prohibido el acceso de los campesinos a sus campos acusándolos de colaborar con grupos armados rivales y con las fuerzas armadas nacionales. De modo similar, en Dhera y Lombo, en el territorio de Djugu (provincia de Ituri), la CODECO ha amenazado presuntamente a los agricultores y les ha impedido acceder a sus granjas cobrando peajes de paso a los lugareños.

45. También se han documentado obstáculos al ejercicio del derecho a la salud en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. Los ataques dirigidos contra hospitales y centros de salud causaron la evacuación de personal y pacientes y pusieron en riesgo la continuidad de los servicios médicos. Durante el período que abarca el informe, la Oficina Conjunta documentó que el 25 de enero de 2024, en Mpati, en el territorio de Masisi (provincia de Kivu del Norte), miembros del M23 asesinaron a una enfermera por prestar atención médica a víctimas de violencia sexual y documentar los abusos.

46. Durante el período examinado, la Oficina Conjunta documentó un total de 425 muertes en reclusión, lo que supone un aumento significativo (150 %) en comparación con las 170 documentadas durante el período abarcado por el informe anterior. Las principales causas de defunción fueron el hacinamiento y las condiciones de reclusión deficientes, por ejemplo en forma de falta de acceso a atención médica y de alimentación insuficiente. Pese a la labor de promoción llevada a cabo por la Oficina Conjunta a nivel provincial y nacional, se han registrado pocos avances. Pese a ello, el 18 de octubre de 2023 se publicó en el *Boletín Oficial* la Ley núm. 23/028 sobre los principios fundamentales del sistema penitenciario, en la que se prevé reducir el hacinamiento en las prisiones y mejorar los derechos de los reclusos.

2. Medidas adoptadas por la Oficina Conjunta

47. La Oficina Conjunta prosiguió sus actividades de apoyo a los derechos económicos, sociales y culturales y al desarrollo sostenible, y contribuyó a la formulación del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para el período 2025-2029. Por ejemplo, en noviembre de 2023 organizó una sesión de capacitación para 25 periodistas (11 mujeres y 14 hombres) sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el derecho al desarrollo. También organizó otro taller sobre los principios de no discriminación y de no dejar a nadie atrás, en el que participaron 28 hombres y 5 mujeres de los ministerios responsables de las personas con discapacidad y de la planificación, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

48. Durante una misión sobre el terreno llevada a cabo del 8 al 12 de mayo de 2024 en Fungurume (provincia de Lualaba), la Oficina Conjunta evaluó el impacto ambiental de las actividades mineras. Señaló que la contaminación del aire y de los ríos repercutía negativamente en el derecho a la salud y había causado el ingreso hospitalario de 114 personas (70 mujeres, 40 niños y 4 hombres) entre el 16 y el 22 de enero de 2024 por consumo de agua contaminada. Los denunciantes de irregularidades y defensores de los derechos humanos que habían denunciado la situación habían recibido amenazas. La Oficina Conjunta emprendió actividades de promoción ante las autoridades locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se garantizara su protección física y se iniciara una investigación sobre las amenazas recibidas por las personas que apoyan a las comunidades o denuncian violaciones de los derechos ambientales.

49. La Oficina Conjunta también siguió apoyando la capacitación de las autoridades nacionales en el ámbito de las industrias extractivas. Tras la adhesión de la República Democrática del Congo a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos en junio de 2023²⁵, la Oficina Conjunta organizó un taller al respecto en Lubumbashi dirigido a

²⁵ Véase <https://www.voluntaryprinciples.org/>.

jueces, miembros de las fuerzas de seguridad y de defensa nacionales y miembros de las organizaciones de la sociedad civil.

E. Lucha contra la impunidad

50. La Oficina Conjunta siguió prestando un apoyo técnico y logístico directo al sistema de justicia congolés, que abarcó la prestación de apoyo a las investigaciones judiciales, el despliegue de tribunales móviles y la aportación de contribuciones para actualizar y aplicar estrategias de enjuiciamiento en todo el país, en particular en las provincias más afectadas por el conflicto, así como en las provincias de Kasái y Kasái Central. El apoyo de la oficina a las investigaciones y los procedimientos judiciales contribuyó a llevar ante la justicia a los autores de delitos graves, entre ellos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos, como actos de violencia sexual relacionada con el conflicto y vulneraciones graves de los derechos del niño. La oficina organizó nueve misiones de investigación (2 en Ituri y 7 en Kivu del Sur) en coordinación con la MONUSCO y facilitó la prestación de protección judicial a 845 víctimas y testigos, entre ellos 390 mujeres, 336 hombres y 6 niños. También prestó apoyo a siete juicios, que contribuyeron a la condena de 79 soldados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, 23 agentes de la Policía Nacional Congoleña, 315 miembros de grupos armados y 105 civiles que habían participado en violaciones y abusos de los derechos humanos.

51. La Oficina Conjunta también impartió capacitación inicial a 2.500 nuevos jueces (835 mujeres y 1.665 hombres) sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la administración de justicia. En el ámbito de la justicia transicional, la Oficina Conjunta prestó apoyo técnico y financiero a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de la provincia de Kasái Central para que ultimara su reglamento, que fue validado el 25 de julio de 2023 en Kananga. Se prestó apoyo adicional, en particular en forma de sesión de capacitación sobre los enfoques de la justicia transicional centrados en las víctimas, al Fondo Nacional de Reparación para las Víctimas de la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos y Otros Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en la República Democrática del Congo, que se puso en marcha en octubre de 2023.

F. Apoyo a las autoridades nacionales en la esfera de la medicina forense

52. La Oficina Conjunta siguió apoyando a las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad, entre otras cosas proporcionando conocimientos forenses, de conformidad con la resolución 54/34 del Consejo de Derechos Humanos. Durante el período que abarca el informe, los peritos forenses del ACNUDH realizaron 24 autopsias en Kinshasa y Goma para contribuir a las investigaciones de las autoridades judiciales.

53. El equipo forense adoptó enfoques innovadores, como el establecimiento y la movilización de un equipo temporal de médicos, psicólogos y miembros de las asociaciones de víctimas. En septiembre de 2023, el equipo realizó una evaluación médica y psicológica de tres días de duración a 120 niños víctimas y a sus representantes legales tras una decisión judicial emitida por el Tribunal Superior Militar de Kinshasa.

54. En julio de 2023, juntamente con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y en colaboración con la Universidad de Kinshasa, la Oficina Conjunta organizó una conferencia internacional sobre los retos a que se enfrentaba la medicina forense en el país, que contó con más de 100 participantes y en la que se aprobaron varias recomendaciones destinadas a fomentar el desarrollo de infraestructuras forenses y la introducción de cursos de medicina forense en universidades de todo el país.

55. Del 5 al 10 de noviembre de 2023, en Kisangani (provincia de Tshopo), la Oficina Conjunta impartió capacitación a 67 funcionarios judiciales (53 hombres y 14 mujeres) sobre la contribución de la policía a la lucha contra la impunidad. También donó equipamiento a tribunales civiles y militares para mejorar su capacidad operativa, facilitar su movilidad y

promover los derechos de las víctimas. Del 14 al 19 de mayo de 2024, la Oficina Conjunta prestó apoyo a la Universidad de Kinshasa en la organización de un taller sobre la redacción de los perfiles de competencias y de puestos necesarios para el establecimiento de un programa de formación en medicina forense en las universidades de la República Democrática del Congo. Gracias al apoyo técnico y financiero de la Oficina Conjunta, el Colegio de Médicos colegió oficialmente a cuatro nuevos médicos forenses.

56. La Oficina Conjunta también prestó apoyo a la construcción e inauguración en noviembre de 2023 de un centro de medicina forense en Bukavu (provincia de Kivu del Sur) y en junio de 2024 organizó un taller de desarrollo de aptitudes en buenas prácticas forenses en el que participaron 16 profesionales, 4 de ellos mujeres.

IV. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos

A. Medidas destinadas a facilitar la interacción con los mecanismos de las Naciones Unidas y la aplicación de sus recomendaciones, y prestación de apoyo a los mecanismos nacionales

57. Pese a la labor de promoción desempeñada por la Coalición Congoleesa contra la Pena de Muerte, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que el 21 de febrero de 2024 mandó un memorando al Presidente instándole a que mantuviera la moratoria y apoyara la aprobación del proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte, el Gobierno confirmó el levantamiento de la moratoria *de facto* el 13 de marzo de 2024. Durante el diálogo interactivo ampliado sobre la República Democrática del Congo, celebrado en Ginebra los días 2 y 3 de abril de 2024 en el marco del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado, la Representante Especial del Secretario General para la República Democrática del Congo y el equipo de expertos internacionales sobre la República Democrática del Congo pidieron al Gobierno que reconsiderara su decisión de levantar la moratoria sobre la pena de muerte²⁶. En las reuniones mantenidas con el Presidente y otros representantes del Gobierno durante su visita al país, el Alto Comisionado reiteró la oposición de las Naciones Unidas a la aplicación de la pena de muerte.

58. La Oficina Conjunta apoyó la puesta en marcha de la entidad de enlace en materia de derechos humanos²⁷, facilitó la formulación del plan estratégico de derechos humanos de la Asamblea Nacional y prestó apoyo al Gobierno en su interacción con el sistema de las Naciones Unidas. También coordinó la redacción del informe del equipo de las Naciones Unidas en el país para el examen periódico universal, que se presentó el 7 de abril de 2024. También apoyó al Gobierno, a través de su Comité Interministerial de Derechos Humanos, en la elaboración de su informe para el cuarto ciclo del examen periódico universal y en el seguimiento de los informes atrasados para los órganos de tratados.

B. Información actualizada sobre los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos

59. El 18 de octubre de 2023 se publicó la Ley núm. 23/027, de 15 de junio de 2023, sobre la protección y la responsabilidad de los defensores de los derechos humanos, a lo largo de cuyo proceso de elaboración había prestado apoyo la Oficina Conjunta. Si bien dicha ley establece importantes salvaguardias para la labor de los defensores de los derechos humanos, es preocupante que algunas de sus disposiciones puedan restringir los derechos y libertades individuales.

²⁶ Puede encontrarse la declaración del Alto Comisionado en <https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2024/04/drc-insecurity-alarming-levels-turk-reports>.

²⁷ Véase <https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/D.09.35.12.08.2009.htm>.

60. Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2023, la Oficina Conjunta facilitó apoyo a un taller en línea para representantes de instituciones nacionales de derechos humanos francófonas de Benin, Burkina Faso, Malí, Marruecos y la República Democrática del Congo con el fin de que expusieran sus experiencias en la vigilancia del respeto de los derechos humanos durante los períodos electorales. Los participantes intercambiaron buenas prácticas en materia de vigilancia de los derechos humanos y el discurso de odio durante los períodos electorales.

V. Conclusiones y recomendaciones

61. La situación de los derechos humanos y de la seguridad en la República Democrática del Congo sigue siendo muy preocupante. Los ataques y las represalias de los grupos armados en zonas densamente pobladas siguen planteando graves riesgos para la protección de los civiles. Los incidentes documentados y el número de abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por grupos armados en las provincias afectadas por el conflicto ponen de relieve las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno para cumplir su obligación de proteger a la población civil dentro de su territorio. El levantamiento de la moratoria *de facto* sobre la pena de muerte es una respuesta preocupante para hacer frente a esas dificultades y aumenta la inseguridad jurídica, puesto que las circunstancias que podrían dar lugar a la aplicación de dicha pena son amplias y están definidas con vaguedad.

62. Pese a los avances alcanzados en la República Democrática del Congo en el ámbito de la lucha contra la violencia sexual relacionada con el conflicto y otros tipos de violencia sexual y de género, el número de víctimas documentadas de violencia sexual relacionada con el conflicto aumentó durante el período que abarca el informe. Consciente de la necesidad de que se adoptara un enfoque de la justicia transicional centrado en las víctimas, el Gobierno siguió invirtiendo en la lucha contra la impunidad y redobló sus esfuerzos para que el Fondo Nacional de Reparación para las Víctimas de la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos y Otros Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en la República Democrática del Congo dispusiera de financiación y capacidad técnica suficientes.

63. Si bien se han producido avances positivos en la lucha contra la impunidad por los abusos cometidos en el pasado y en el proceso de justicia transicional, siguen siendo necesarios esfuerzos sustanciales para reforzar la coordinación entre los mecanismos de justicia transicional y otras iniciativas de paz a fin de combatir de forma significativa las causas profundas de la violencia y el conflicto.

64. En este contexto, el Alto Comisionado recomienda al Gobierno de la República Democrática del Congo que:

a) Siga abriendo el espacio democrático y garantizando la protección de los derechos y libertades de todas las personas, incluidos los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, y vele por que el uso de la fuerza por los agentes estatales, también durante las operaciones de mantenimiento del orden público, se ajuste estrictamente al derecho de los derechos humanos;

b) Vele por la plena protección de las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica y del derecho a no ser objeto de detención arbitraria, malos tratos y tortura;

c) Garantice la rendición de cuentas adoptando medidas adecuadas para llevar ante la justicia a todos los presuntos autores de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidos los documentados en relación con el proceso electoral;

d) Revoque la decisión de levantar la moratoria *de facto* sobre la pena de muerte y ultime el proceso legislativo destinado a abolirla;

e) Agilice la aprobación del proyecto de ley sobre tribalismo, racismo y xenofobia como medida legislativa fundamental para prevenir y combatir el discurso de odio y la incitación a la hostilidad, la violencia y la discriminación, garantizando al mismo tiempo que este no vulnere el derecho a la libertad de expresión, y adopte medidas eficaces para reducir la violencia intercomunitaria;

f) Modifique la ley sobre la protección y la responsabilidad de los defensores de los derechos humanos para eliminar de ella las disposiciones que tipifican sus actividades como delito y asegurarse de que está en plena conformidad con las normas internacionales de derechos humanos;

g) Vele por el despliegue de fuerzas de seguridad y defensa suficientes, eficaces y responsables, y por que estas actúen en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario a fin de garantizar la protección de los civiles en todo el territorio congolés, prestando especial atención a las zonas de las que se ha retirado la MONUSCO;

h) Se asegure de que todas las operaciones militares contra grupos armados llevadas a cabo por las fuerzas armadas congoleesas, actuando solas o conjuntamente con tropas desplegadas bilateralmente o con fuerzas regionales, cumplan estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario;

i) Adopte medidas para prevenir los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y el personal humanitario y para exigir cuentas a los autores, también cuando sean miembros de las fuerzas armadas congoleesas;

j) Prosiga su participación y su compromiso con el proceso de Nairobi y otras iniciativas en curso encaminadas a lograr una paz sostenible, velando al mismo tiempo por la ejecución efectiva del Programa de Desarme, Desmovilización, Recuperación Comunitaria y Estabilización;

k) Adopte las medidas necesarias para que las fuerzas armadas congoleesas y los grupos armados que luchan juntamente con ellas respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y ponga fin a la impunidad de las violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario;

l) Aplique todas las medidas necesarias para prevenir y reparar la violencia sexual relacionada con el conflicto, llevar a los autores ante la justicia y facilitar una asistencia centrada en las víctimas, de conformidad con la ley por la que se establecen los principios fundamentales relativos a la protección y reparación de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto y de las víctimas de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad;

m) Destine los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha efectiva del Fondo Nacional de Reparación para las Víctimas de la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos y Otros Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en la República Democrática del Congo;

n) Dote a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de independencia y de recursos financieros y materiales suficientes;

o) Diseñe una política de justicia transicional integral, centrada en las víctimas, inclusiva, participativa y que tenga como objetivo determinar las causas profundas de la violencia y el conflicto para hacerles frente. Con ese fin, siga consultando a la población, garantice la participación significativa de las víctimas y las comunidades afectadas e integre los resultados de las consultas nacionales en el proyecto de política.

65. Los asociados internacionales de la República Democrática del Congo deberían:

a) Pedir a los Estados miembros de todas las fuerzas regionales, en particular la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en la República Democrática del Congo, así como a otros Estados miembros que despliegan tropas en la República Democrática del Congo en virtud de acuerdos bilaterales, que garanticen

que todas esas tropas operen en estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y garantizar la financiación para establecer y aplicar marcos de cumplimiento de los derechos humanos, de conformidad con el Marco Estratégico de la Unión Africana para el Cumplimiento y la Rendición de Cuentas en las Operaciones de Apoyo a la Paz;

b) Instar a los Estados que desplieguen tropas en la República Democrática del Congo en virtud de acuerdos bilaterales a que lo hagan cumpliendo las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, más concretamente, a que velen por que las tropas reciban una capacitación adecuada en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario antes de ser desplegadas y se aseguren de que estas darán al personal humanitario pleno acceso a las personas necesitadas;

c) Seguir apoyando la labor en materia de derechos humanos en la República Democrática del Congo mientras se aplica el plan de separación de la MONUSCO.
